# La participación ciudadana no-electoral en Argentina

**Rocío Annunziata**

A 100 años de las primeras elecciones en las que se ejercitaba en Argentina el derecho al voto secreto amparado por la Ley Sáenz Peña -primer paso hacia una participación electoral libre y universal-, las formas en las que la ciudadanía entiende que puede "participar" se han ampliado y complejizado. La participación electoral y la participación en el seno de los partidos políticos han condesado durante casi un siglo la significación de la participación ciudadana en democracia. Desde ya, en un siglo en el que hubo muy pocos y efímeros momentos de democracia, ésta resultaba una aspiración exigente. Pero en la bisagra de los siglos XX y XXI comenzó a producirse un giro significativo: conquistada la participación electoral fue la participación no-electoral la que se expandió y diversificó.

El 2 de abril de 1916 tenía lugar un hito fundamental en la historia de la participación ciudadana: los ciudadanos varones mayores de 18 años de edad podían ejercer libremente su voto con la garantía otorgada por el secreto y el cuarto oscuro. Recién el 11 de noviembre de 1951, con la primera elección en la que pudieron participar las mujeres, el derecho al sufragio se universalizaba. Y recién en 2013 ocurrirían las primeras elecciones en las que estaban habilitados a votar los jóvenes mayores de 16 años. La democracia está llamada a correr los límites y a ampliar los horizontes, de manera que la historia de la participación electoral no es una historia cerrada. Pero no nos concentraremos aquí en ésta sino en su vínculo con la participación no-electoral.

Durante el siglo XX, en breves lapsos de vida política democrática así como en el tiempo del llamado "retorno" de la democracia en 1983, la contrapartida más evidente de la participación electoral por fuera de los momentos electorales era la participación en el

seno de los partidos políticos -y en los sindicatos-. El compromiso partidario, la militancia, la pertenencia a una organización colectiva transformaba en cotidiana, o al menos en más permanente, la intermitente participación por medio de las urnas. De hecho, el vínculo contingente que se estableció en el siglo XX en las democracias occidentales entre gobierno representativo y partidos políticos, hizo de estos últimos el complemento necesario de la esporádica actividad ciudadana electoral.

Sin embargo, dos grandes transformaciones se han producido hacia finales del siglo XX. Por un lado, los partidos políticos como organizaciones estables y dadoras de identidades y cosmovisiones fueron perdiendo protagonismo frente a los liderazgos personales, y terminaron muy desprestigiados por su asociación a una "clase política" separada de la ciudadanía cuando en diciembre de 2001 se pedía en las calles que "se vayan todos". Según los informes periódicos del Latinobarómetro, a partir de 2001 sólo alrededor de un tercio de los ciudadanos se ha sentido "cercano" a algún partido político. Por otro lado, en Argentina como en las democracias occidentales en general, la erosión del rol de los partidos políticos ha conducido a una paralela disociación entre la legitimidad electoral y la legitimidad de las acciones de los gobernantes. Si las elecciones ya no implican tanto la opción por un rumbo de las políticas como la mera selección de gobernantes, entonces la legitimidad de las decisiones de estos últimos no está garantizada por el resultado de las urnas, al mismo tiempo que la participación electoral se revela con mayor evidencia como insuficiente. En la medida en que "la foto" del momento electoral no se prolonga tan fácilmente durante el mandato como expresión de la voluntad ciudadana, esta voluntad requiere otras y más frecuentes formas de expresarse.

Estos dos fenómenos paralelos (debilitamiento de los partidos políticos e insuficiencia de la legitimidad electoral) permiten pensar que aquello que se nombró como "crisis de representación" constituyó al mismo tiempo una "crisis de participación". ¿Crisis de la cantidad de la participación? ¿Crisis de la intensidad de la participación? Ni lo uno ni lo otro, porque la ciudadanía se mantuvo activa y los diagnósticos de "apatía" y retiro de la

política que circulaban los años previos a 2001 terminaron por revelarse inexactos. Se trataba de la crisis de una forma particular de participar, aquella ligada intrínsecamente a lo que Pierre Rosanvallon llama la "democracia electoral-representativa", y que supone una actividad ciudadana principalmente identificada con votar en los momentos electorales e intervenir de la vida interna de los partidos políticos entre las elecciones. ¿Crisis en el sentido de que estas formas centrales de participación de las democracias electorales-representativas habrían desaparecido o estarían en cuestión? En absoluto. Si algo constituye una conquista fundamental en Argentina y en otros países de nuestra región, que han sido azotados por autoritarismos de todo tipo, es la consolidación de la democracia electoral. No hace tanto tiempo que los distintos actores de la vida política argentina han aceptado que al poder se accede mediante la competencia electoral y el voto ciudadano. Pero si esto finalmente está fuera de cuestión, la actividad ciudadana sí se ha diversificado más allá de la "democracia electoral-representativa". Nuevas formas de participación conviven actualmente con las más tradicionales.

Hagamos un breve repaso. La participación ciudadana no electoral en Argentina estuvo protagonizada en los años ochenta por dos grandes conjuntos de actores. Desde ya por los partidos políticos y los sindicatos, revitalizados con el reinicio de la democracia electoral. Pero también de manera característica por los movimientos de Derechos Humanos, que presentaron una configuración novedosa en su formato y sus reclamos frente a estos actores más tradicionales de la sociedad civil. Durante los años noventa emergieron, como consecuencia del desempleo producido por las políticas neoliberales, actores que fueron fundamentales en la escena pública argentina durante varios años y que tomaron su nombre precisamente de su forma de aparecer en público: los llamados "piqueteros". Este segundo grupo novedoso de actores estuvo constituido por agrupaciones de desocupados ligadas a sindicatos, partidos políticos de izquierda o colectivos autonomistas, y sus acciones de cortes de ruta se orientaban a reclamar recursos en un contexto de severa crisis económica, pobreza e indigencia (al tiempo que organizaban en el territorio prácticas de subsistencia como comedores, merenderos y roperos

comunitarios). Movimientos de derechos humanos y movimientos piqueteros pueden considerarse casos emblemáticos de lo que la literatura ha llamado "nuevos movimientos sociales": si bien distintos a los partidos políticos, éstos se convirtieron en actores con organización, identidad y alguna forma de ideología compartidas.

La reunión de movimientos piqueteros y ciudadanos no organizados que vieron empeorar sus condiciones de vida significativamente explotó en la bisagra del siglo con el célebre "cacerolazo" de diciembre de 2001. Esta masiva movilización fue interpretada como una reacción a la confiscación de los depósitos bancarios que se había anunciado, pero también constituyó una reacción ciudadana a la declaración del estado de sitio decretado por el entonces presidente. Golpeando sus cacerolas, miles de argentinos se reunieron en la Plaza de Mayo y en muchas ciudades del país durante las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001 al grito de "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", logrando como efectos inmediatos la renuncia del Ministro de Economía y del Presidente F. De la Rúa, pero teniendo que lamentar un saldo de muertos y heridos por la represión policial. El rechazo profundo a todos "los políticos" fue el punto más alto de la crisis de representación en Argentina y fue acompañado por una efervescencia social y ciudadana que le dio continuidad al estallido emergente por medio de asambleas barriales durante gran parte del año 2002.

El "cacerolazo" de diciembre de 2001 constituyó en algún sentido el último de los movimientos del siglo XX y el primero del siglo XXI. Fue el último del siglo XX porque sus protagonistas eran, en parte, actores organizados de la sociedad civil, marcados por los rastros de las formas organizativas del pasado como sindicatos y partidos de izquierda; y la reacción a la declaración del estado de sitio puede verse como heredera de los movimientos de DDHH; fue también el primero del siglo XXI porque el resto de sus protagonistas eran ciudadanos independientes que salieron espontáneamente a protestar a medida que los medios de comunicación transmitían las imágenes y propagaban la movilización. La televisión cumplió en diciembre de 2001 un rol similar al que cumplirían las redes sociales

años después, en Argentina y en el mundo, como difusoras y amplificadoras de masivas movilizaciones ciudadanas.

Poco tiempo después, en el comienzo del ciclo kirchnerista, la recuperación económica y el desgaste habían hecho mermar las asambleas barriales, y la política de inclusión y no represión habían transformado a muchos de los movimientos piqueteros en movimientos sociales integrados a la coalición de gobierno. En paralelo, en el nivel de los gobiernos locales, comenzó después de la crisis de 2001 el surgimiento y luego expansión de dispositivos participativos convocados por las autoridades que invitaban a los vecinos a discutir y decidir sobre su territorio inmediato. El ejemplo paradigmático fue el del Presupuesto Participativo que surgió por primera vez en 2002 en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego en 2006 en el Municipio de Morón de la Provincia de Buenos Aires y que llegó a extenderse en los años siguientes a más de 50 municipalidades de 14 provincias argentinas. La puesta en marcha de este mecanismo de participación fue transversal a los colores políticos o etiquetas partidarias de los gobiernos locales. El alcance de los dispositivos como los Presupuestos Participativos (u otros como consejos barriales, consejos consultivos temáticos, planificación estratégica participativa, etc.) nunca dejó de ser limitado en los efectos para las condiciones de vida de la población, dados los pocos recursos con los que generalmente se contó y la concentración de las asambleas en problemas puntuales del barrio o de la cuadra que se fomentaba desde el propio diseño institucional. Sin embargo, la difusión de este tipo de dispositivos vino a mostrar cómo "hacer participar" se transformaba en parte de las herramientas necesarias para gestionar, gobernar y representar en la política contemporánea.

A esta forma de participación "otorgada" desde arriba más que "conquistada" desde abajo por la ciudadanía y orientada principalmente a la gestión del entorno inmediato, se sumarían al promediar la primera década del siglo XXI ciclos de protestas que apelaban a la figura de los "auto-convocados" y que reunían malestares heterogéneos en rechazo de situaciones y particularmente decisiones o medidas de los gobernantes. Una de las primeras

movilizaciones masivas convocadas por un "ciudadano común" y reivindicando la ausencia de consignas políticas, banderas y organizaciones, había sido el ciclo de marchas por la seguridad impulsado por J. C. Blumberg en 2004, luego de que su hijo fuera secuestrado y asesinado. Pero movilizaciones posteriores, contra determinadas decisiones del gobierno, fueron interpretadas más claramente como "anti-oficialistas" al tiempo que apelaban a la legitimidad de la "espontaneidad". Se trató del ciclo de "cacerolazos" que tuvieron lugar entre 2012 y 2013 y que constituyeron las primeras movilizaciones nombradas por su fecha, indicando su carácter fugaz y acontecimiental: 13S (2012), 8N (2012), 18A (2013) 8A (2013). También fueron las primeras en ser convocadas e impulsadas directamente desde las redes sociales y en mostrar los rasgos más salientes de los movimientos ciudadanos contemporáneos: ausencia –al menos aparente- de actores organizados, ausencia de portavoces oficiales, elaboración artesanal de carteles en lugar de banderas, multiplicación de las consignas individuales y reunión de la heterogeneidad en la expresión de un rechazo. La negatividad –esta adición de identidades y motivos diversos en torno a un veto o rechazo- resulta un rasgo saliente de muchas movilizaciones ciudadanas contemporáneas, en Argentina y en otras democracias del mundo, en la medida en que no es en torno a proyectos ideológicos o causas comunes que los ciudadanos tienden a reunirse y actuar. Sin embargo, algunas movilizaciones más recientes como la convocada con la consigna #NiUnaMenos contra la violencia machista en 2015 han dejado ver que la negatividad puede convivir con una agenda positiva de medidas concretas exigidas por la ciudadanía y que las organizaciones sociales y políticas más clásicas pueden asimismo confluir con las potencialidades abiertas por las nuevas tecnologías. En el cruce de los universos online y offline no han sido sólo manifestaciones callejeras las que han surgido, sino también otros experimentos participativos como discusiones de proyectos en plataformas cerradas, o bien peticiones a las autoridades mediante recolección de firmas, en las que se apela con gran efectividad a la empatía con historias singulares puestas en primer plano. Lo que parecen enseñarnos las experiencias más recientes es que incluso los rasgos básicos de los que supieron ser los "nuevos movimientos sociales" (organización, identidad, ideología) están generalmente ausentes en la actividad ciudadana actual.

En los primeros años del siglo XXI se han entonces multiplicado y complejizado las formas en las que los ciudadanos participan en la vida política. Es cierto que el voto es la única forma de participar que asegura la igualdad de influencia de los miembros de un colectivo en la decisión, y, la boleta electoral -ha advertido bien Pierre Rosanvallon- ha funcionado como un operador de condensación y simplificación del lenguaje para esta forma de igualitaria de participación. Pero hoy en día los ciudadanos no se conforman con un lenguaje único ni con hacer oír su voz en momentos aislados. A un siglo de una de las primeras conquistas en el terreno de la participación electoral, es en el terreno de la participación no-electoral en el que se juega hoy la creatividad y la innovación democrática.